



MINUTA PROYECTO DE LEY DE MONITOREO TELEMÁTICO EN SENADO
(Boletín 9.715-07)

ESTE MIÉRCOLES LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO VERÁ ESTE PROYECTO DE LEY QUE VERÁ INFORME FINANCIERO Y LO DESPACHARÁ A LA SALA DEL SENADO.

1. Antecedentes.

- Moción de la Senadora Adriana Muñoz, presentada el 12 de noviembre de 2014.
- Actualmente se encuentra en 3° Trámite Constitucional, esperando a que se conozca el IF en la Comisión de Hacienda del Senado.
- El texto despachado por la Comisión Mixta forma parte de un acuerdo sostenido por el Ejecutivo con la Senadora Muñoz y resto de senadoras de oposición.
- Cuenta con urgencia de discusión inmediata.

2. Objeto del proyecto.

Establecer la supervisión, mediante monitoreo telemático, de la prohibición de acercarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o estudio. Lo anterior tendrá lugar cuando se imponga la prohibición de acercamiento por los tribunales de familia como medida cautelar o por los tribunales penales como medida cautelar, medida accesoria o condición de la suspensión condicional del procedimiento.

3. Contenido.

- **Administración del sistema.** La administración, al igual que la ley vigente, corresponde a Gendarmería de Chile.
- **Protección solicitada por la víctima.** La víctima podrá solicitar portar un dispositivo para su protección.
- **Mantención del dispositivo.** La persona que inutiliza dolosamente el dispositivo será responsable del delito de daños. Asimismo, en caso de existir un desperfecto, la persona sujeta a control deberá dar aviso a la brevedad en caso de que exista un desperfecto.
- **Costo del dispositivo.** El dispositivo de monitoreo telemático es gratuito para la persona que debe portarlo.
- **Comisión Para la Elaboración de Propositiones Técnicas Para el Seguimiento y Evaluación de los Casos de Violencia Intrafamiliar.** La comisión será liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y estará conformada por el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y la Subsecretaría del Interior. Tiene por objeto diseñar y proponer periódicamente a los organismos públicos la Pauta Unificada de Evaluación Inicial de Riesgo, como también

otros aspectos técnicos que faciliten el seguimiento y la evaluación de los casos de violencia intrafamiliar.

- **Informe de condiciones técnicas.** Gendarmería deberá informar semestralmente a las Cortes de Apelaciones las condiciones técnicas para decretar supervisión mediante monitoreo telemático.
- **Procedimiento para los actos de maltrato VIF, en sede de familia:**
 - Requisitos para que el juez de familia pueda decretar la supervisión mediante de un dispositivo de monitoreo telemático, en conjunto con la medida cautelar de alejamiento:
 - a) Uno o más antecedentes que permitan presumir la existencia de un hecho de VIF.
 - b) Que existan antecedentes suficientes que permitan al juez considerar el monitoreo como indispensable para resguardar la seguridad de la víctima o de su familia.
 - c) Que el informe de evaluación de riesgo, elaborado en base a la Pauta Unificada, indique un riesgo alto para la víctima.
 - Cuando el juez reciba una denuncia con pauta de riesgo alta para la víctima, requerirá un informe de factibilidad técnica a Gendarmería, quien dispondrá de 5 días para remitir el informe.
 - Carabineros estará a cargo la supervisión de cumplimiento de la medida cautelar.
 - Se establece que el juez debe realizar una audiencia de seguimiento de la medida cautelar supervisada por monitoreo telemático dentro de los 90 días desde que se impuso la medida, dicha audiencia será citada de oficio.
 - Respecto de las demandas escritas, en el más breve plazo se citará a la víctima a una entrevista con el Consejo Técnico del Tribunal, para que evalúe el riesgo.
- **Procedimiento para los delitos VIF, en sede penal:**
 - El juez podrá decretar la supervisión mediante monitoreo telemático de las *medidas cautelares y condiciones para la suspensión condicional del procedimiento*, cuando imponga la prohibición de acercarse a la víctima. Es necesario que exista un informe de evaluación de riesgo alto para la víctima.
 - La solicitud deberá ser presentada en audiencia en conjunto con la medida cautelar o suspensión condicional, o en cualquier estado del procedimiento una vez fueron decretadas. Requiere que la investigación esté formalizada.
 - El juez de garantía requerirá a Gendarmería un informe de factibilidad. Asimismo, encargará a Carabineros la supervisión de la medida cautelar o de la suspensión condicional.
 - La resolución que rechaza la medida es apelable.



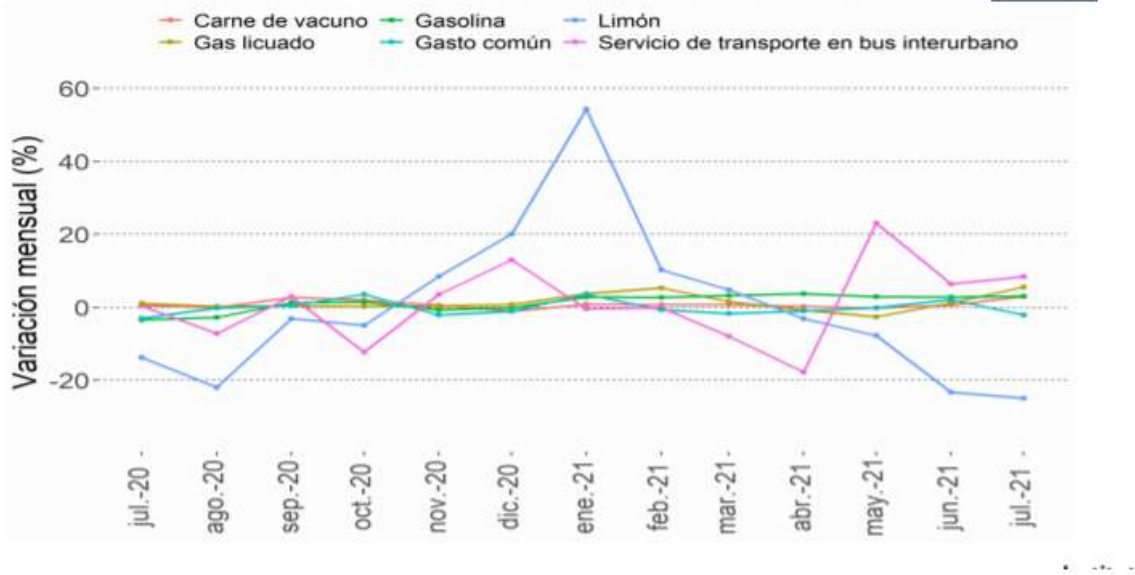
- Por último, la supervisión mediante monitoreo se aplica cuando se impone en la sentencia la *medida accesoria* de prohibición de acercarse a la víctima. En la sentencia se debe decretar la obligación de que se supervise la medida a través de monitoreo telemático.
- **Vigencia de la ley:**
 - Para los actos de violencia intrafamiliar de conocimiento de los tribunales de familia, la entrada en vigencia **seis meses** desde la publicación de la ley.
 - Para los delitos de violencia intrafamiliar de conocimiento de los tribunales penales, la entrada en vigencia será **gradual**: Primera etapa: **10 meses** para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Coquimbo. Segunda etapa: **14 meses** para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Se dispara la Inflación

IPC de julio aumentó 0,8% respecto al mes anterior. Destacaron, por su incidencia en el resultado, las alzas de [#Transporte](#) y de [#AlimentosyBebidasNoAlcohólicas](#) y el descenso de [#VestuarioyCalzado](#).

Evolución productos

Variación mensual (julio 2020 - julio 2021)



Los productos o servicios con alzas que más incidieron en la variación del [#IPC](#) de julio fueron la [#gasolina](#) (3,1%), el [#gas](#) licuado (5,6%) y la [#carne](#) de vacuno (3,0%). Entre los descensos destacó el [#limón](#) (-24,9%).

SUGERENCIAS DE TIPS.-

Es una mala noticia este IPC de 0,8% porque impactará más en el bolsillo de los grupos más vulnerables y de las familias en general.

Por eso reiteramos la importancia mantener los apoyos a las personas y fortalecer la recuperación de los empleos perdidos durante la pandemia.

Esperamos que el Banco Central actúe y cumpla su tarea de mantener la inflación a raya.

Nuestra propuesta de futuro es trabajar por generar empleos de calidad, mayor protección social y alcanzar un mayor crecimiento. que es lo único que puede mejorar de manera permanente y sostenible el bienestar de las familias vulnerables y de ingresos medios.

la inflación anualizada con este 0,8% llega a 4,5%, lo que está fuera del rango meta del Central que es 3 a 4%.

SICHEL: EL CANDIDATO QUE ES CONTINUIDAD DE PIÑERA

Ya hemos conocido las primeras encuestas post primarias legales de cara a la primera vuelta presidencial y la derecha a través de sus 2 candidaturas (Sebastián Sichel y José Antonio Kast) muestra una importante influencia de cara a las definiciones presidenciales.

Sichel -que dio la sorpresa en la primaria legal al ganar a Lavín- muestra una intención de voto de alrededor del 20%, con fuerte apoyo en los votantes ABC1 donde alcanza casi un 40% de intención de voto, sorprende con importante adhesión en los votantes de ingresos medios -C2 y C3- y desde el punto de vista etario presenta importante apoyo entre los votantes de 30 a 50 años.

Estos datos han dado un respiro al segundo piso de la Moneda ya que su operación política de apoyar a Sichel funcionó -aliado con los poderes fácticos empresariales- y en noviembre habrá una candidatura como la de Sichel que es la continuidad de Piñera.

En la élite existe claridad -no así en el electorado- que Sichel es "el candidato de los empresarios que no quieren perder privilegios" como lo sostuvo Matthei en enero pasado. Junto a Sichel está Juan José Santa Cruz y Rafael Guilisasti operadores del gran empresariado, que incluso en el caso de este último está ligado a SQM y la Confederación Empresarial quienes están poniendo importantes recursos económicos en la campaña y el amplio abanico de medios de comunicación escritos, televisivos y radiales al servicio de la campaña de Sichel y por esa vía nos enteramos de la vida de su círculo de apoyo como su jefa de comunicaciones, sus escuderos políticos (Chadwick, Allamand) y ahora nos informamos de que un hijo de la aristocracia como Juan Luis Ossa Santa Cruz escribirá el relato político de la campaña.

Claramente detrás de la candidatura de Sichel está el piñerismo y la derecha económica-economicista que defenderá el mercado, el status quo, el emprendimiento individual, los grandes proyectos de inversión que no deben tener cortapisas y una permanente crítica al Estado para deje hacer la pega a los privados que nos devolverán el progreso perdido.

Incluso ya Sichel señaló en materia de tributos que él “no cree conveniente subir los impuestos a las personas ni a la renta” o sea con Sichel no habrá mayor carga tributaria para los super millonarios (que lo apoyan a él) ni tampoco las mineras pagarán más royalty minero para impulsar por ejemplo la minería verde. Con Sichel solo se subirán los impuestos a los alimentos azucarados y capaz que en algunas semanas más plantee que subirá el IVA.

O sea la posibilidad de construir un Chile más inclusivo con pensiones dignas, con educación y salud pública de calidad, con más recursos para las regiones no se obtiene por la vía de Sichel que no subirá la carga tributaria al 1% de mayores ingresos del país.

O sea, con Sichel tendremos más Piñera y más derecha conservadora y economicista, pero con un candidato que se pone al servicio de los grandes empresarios y hablándonos de una historia de vida de esfuerzo que a estas alturas no sabemos si es real o es una ficción para ganar votos.

Sichel es la última chance para la derecha económica de tener apoyo social y probablemente se tendrá un fuerte bombardeo comunicacional desde los medios de comunicación controlados por empresariado sobre su supuesta vida meritocrática, sobre sus tatuajes etc etc, pero la oposición, en especial la de centroizquierda –cuando tenga candidata el 21 de agosto- deberá abocarse a instalar un dique en el electorado menor de 45 años, en los de ingresos medios y sectores vulnerables de que Sebastián Sichel es lo mismo que Sebastián Piñera, es decir un gobierno que privilegiará al empresariado, que mantendrá los privilegios sociales y que no habrán transformaciones sociales que apunten a reconstruir un Chile más digno, más inclusivo y que progresa para todos/as.

No se pierdan Sebastián Sichel es lo mismo que Sebastián Piñera, es la derecha conservadora gobernando a favor de sus privilegios y sus negocios. Pero parece que la ciudadanía aún no lo tiene claro, es hora de hacer pedagogía política democrática en la sociedad y no seguir con las peleas políticas que solo le interesa a una minoría militante partidaria.

La derecha económica no puede pasar a la segunda vuelta definitiva en noviembre.

Bol.N° 11696-12 proyecto de ley, que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, para someter a la evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal.

1. La incorporación de las faenas forestales a la evaluación ambiental de la ley 19.300 de Medio Ambiente

El lobby de las empresas forestales apunta a mantener la exclusión de los proyectos forestales del sistema de evaluación ambiental de la ley 19.300.

En las dos sesiones que la Comisión de Agricultura del Senado realizó para escuchar a los diversos expertos en temas relacionados con la explotación forestal y sus “probables” consecuencias medio ambientales, los 2 expositores de la academia¹ se manifestaron por la incorporación de dichas faenas a la ley de Medio Ambiente y el resto de los voceros de la industria se opusieron.

Las demás intervenciones, incluidas por supuesto las de autoridades de los servicios públicos involucrados (CONAF e INFOR), sostuvieron que la institucionalidad forestal, basada en el “manejo forestal” de las operaciones, supervisados por la CONAF bastaba para implementar mejoras en el tema ambiental.

2.- Proposición en línea con los desafíos futuros

Hoy en la academia y en la sociedad -que muestra una sensibilidad mayor a los temas de proyectos de inversión con sustentabilidad medioambiental- resulta razonable que el sector forestal sea sujeto de la evaluación medio ambiental que regula la ley 19.300, como lo plantea el boletín 11.696 que está viendo la Comisión de Agricultura del Senado.

Una salida política que debiera promover la oposición en la Comisión en consonancia con el sello verde que está dando en sus propuestas programáticas de futuro **es que debiera**

¹ María Fernanda Salinas, Dra. en Ecología y Profesora de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y Roberto Pizarro, profesor de la cátedra Unesco en Hidrología de Superficie, de la Universidad de Talca

promover la incorporación de toda la actividad forestal a la evaluación ambiental que regula la ley 19.300.

En virtud que no hay Servicio Nacional Forestal, capaz de hacer cumplir la legislación forestal, particularmente los Planes de Manejo, el consenso es que todas las operaciones forestales desde las plantaciones, manejo, y cosecha, sean sometidas al Sistema de Evaluación Impacto Ambiental.

Pero haciendo la siguiente ecuación: **Todas las operaciones forestales**, en predios mayores a 400 has, deberán ser sometidas a la ley 19.300 a través de un **estudio de impacto ambiental**.

Especial relevancia tendría la fase de cosecha que necesariamente debería disminuirse de 500 hectáreas; aquellas que se realicen en predios de entre 400 y 20 has, deberán hacer una **declaración de impacto ambiental**; por último, las de menos 20 hectáreas, y que corresponden a comunidades campesinas, también deben realizar una **declaración de impacto ambiental**. Aunque en este caso, con la supervisión y costos realizada por la Conaf. Por supuesto que en el caso de las dos primeras categorías, la revisión y seguimiento debe ser muy exhaustivo.

3.- Consideraciones Forestales.-

Es importante relevar, respecto de la tala rasa, que para cosechar una hectárea, se requiere el concurso de a lo menos 16 camiones. Hay que imaginar entonces lo que significa realizar cosechas, de la envergadura como las que realizan las grandes empresas, que pueden llegar hasta 500 hectáreas, en el país: destrucción de caminos, instalación de campamentos, riesgos de incendios, situación de quebradas, y cuencas, entre otras “externalidades negativas.

Es decir, en todo este proceso de cosecha, no se evalúan temas relacionados con vialidad, exposición al polvo en las comunidades aledañas, los impactos en la flora y la fauna, etc., etc.

Incluso hubo algunos expertos que relativizan la pérdida de agua en comunidades indígenas. Dicen que tal situación solo se debería a la baja en las precipitaciones producto del cambio climático. Desconociendo la real situación no sólo de las comunidades indígenas aledañas a las explotaciones y predios, sino que también de comunidades campesinas no indígenas

también sufren de esta situación. Se comentó en una de las reuniones que la población que depende de los camiones aljibes, es cercana a las 500 mil familias. Esta situación se presenta en el verano, aunque no exclusivamente, entre las regiones de O'Higgins y los Lagos, donde predominan las plantaciones exóticas de pino y eucaliptos.

Resulta ineludible que en este escenario no exista la evaluación medio ambiental y que existan medidas de mitigación que defina la autoridad medio ambiental.

También resultó interesante conocer algo de la legislación comparada, en donde se presentaron ejemplos de otros países que solo requieren para su funcionamiento, la aprobación de los Planes de Manejo forestal. Se habló de los casos de México, Perú, España y Canadá. Sin embargo, en la mayoría de estos países los bosques pertenecen al Estado. Paradigmático es el caso de Canadá, que se presentaba con una legislación parecida a la de Chile, respecto a los Planes de Manejo. El tema es que el 90% de los bosques canadienses (390 millones de hectáreas) son de propiedad del Estado y su explotación se realiza a través de concesiones privadas. Pero el Servicio Forestal Canadiense, que funciona en todas las provincias, es inflexible a la hora supervisar las operaciones forestales, sobre todo en lo que implica la participación de las “naciones originarias” en todo el proceso. En este último sentido, claramente hay una gran diferencia con la legislación forestal chilena, que privilegia la lógica de mercado, por sobre la participación de las comunidades.

Es cierto que las plantaciones forestales no son un “desierto verde”, como a veces se les caricaturiza; también es verdad que tienen fuertes implicancias económicas, que generan empleos directos e indirectos. Pero, de la misma manera, no se deben desconocer las consideraciones ambientales que tienen su explotación, ni tampoco que sus bosques son ejemplos de biodiversidad, ni menos su espuria historia de consolidación industrial.

Existe consenso entre los estudiosos que el bosque nativo ha disminuido, también que han aumentado las plantaciones forestales; que las comunidades indígenas han perdido sus cauces y fuentes de agua; también que las políticas de vecindad de las empresas forestales, no han sido de las más amistosas.

Esta realidad exige aprobar esta innovación legal y extender la evaluación medio ambiental a los proyectos forestales.

**LISTADO DE INVITADOS A AUDIENCIAS EN COMISIÓN DE ECONOMÍA
PARA PROYECTO SOBRE COMPRAS PÚBLICAS**

A) ONG'S Y EXPERTOS

PAULA DÍAZ , OBSERVATORIO FISCAL QUE TIENE DIVERSOS ESTUDIOS
SOBRE FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE MERCADO PÚBLICO

[REDACTED]

VALERIA LUDDERT, ESPACIO PÚBLICO, UNIDAD TRANSPARENCIA

TRINIDAD INOSTROZA , EX DIRECTORA CHILECOMPRAS (2014-2018)

[REDACTED]

GUILLERMO JIMENEZ, PROFESORA DERECHO PÚBLICO UNIV ADOLFO
IBÁÑEZ

B) GREMIOS PYMES

EDUARDO DEL SOLAR , CONVERGENCIA MESA PYME

[REDACTED]

MARCOS RIVAS , PRESIDENTE ASECH

Invitar vía Tomás Silva (gerente ASECH)+56 9 3210 3429

GIANINA FIGUEROA , UNAPYME

[REDACTED]

ENRIQUE ROMÁN, INSTITUTO PYMES

[REDACTED]

ROBERTO FANTUZZI , ASEXMA

Celular: [REDACTED]

LUIS SOLÍS , PROVEEDORES JUNAEB , PRESIDENTE CONSEJO SOCIEDAD
CIVIL CHILE COMPRA

DIEGO MIRANDA , PRESIDENTE Asociación de funcionarios de
Chile Compra

[REDACTED]

**LISTADO DE INVITADOS A AUDIENCIAS EN COMISIÓN DE ECONOMÍA
PARA PROYECTO SOBRE COMPRAS PÚBLICAS**

A) ONG'S Y EXPERTOS

PAULA DÍAZ , OBSERVATORIO FISCAL QUE TIENE DIVERSOS ESTUDIOS
SOBRE FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE MERCADO PÚBLICO

[REDACTED]

VALERIA LUDDERT, ESPACIO PÚBLICO, UNIDAD TRANSPARENCIA

TRINIDAD INOSTROZA , EX DIRECTORA CHILECOMPRAS (2014-2018)

[REDACTED]

GUILLERMO JIMENEZ, PROFESORA DERECHO PÚBLICO UNIV ADOLFO
IBÁÑEZ

B) GREMIOS PYMES

EDUARDO DEL SOLAR , CONVERGENCIA MESA PYME

[REDACTED]

MARCOS RIVAS , PRESIDENTE ASECH

Invitar vía Tomás Silva (gerente ASECH)+ [REDACTED]

GIANINA FIGUEROA , UNAPYME

[REDACTED]

ENRIQUE ROMÁN, INSTITUTO PYMES

[REDACTED]

ROBERTO FANTUZZI , ASEXMA

Celular: [REDACTED]

LUIS SOLÍS , PROVEEDORES JUNAEB , PRESIDENTE CONSEJO SOCIEDAD
CIVIL CHILE COMPRA

DIEGO MIRANDA , PRESIDENTE Asociación de funcionarios de
Chile Compra

[REDACTED]

TIPS PARA DEBATE INICIAL SOBRE PROYECTO QUE MODERNIZA SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS

Proyecto de ley que moderniza sistema de compras públicas surge en un compromiso con Oposición en el debate de ley de presupuestos 2020 y 2021, glosa 06 del presupuesto de la partida Ministerio de Hacienda que señaló lo siguiente: “El proyecto de ley que moderniza la ley de Compras Públicas, que se presentará durante el primer trimestre del 2021 contemplará los mecanismos para conocer a los beneficiarios finales de todas las empresas o sociedades constituidas en Chile que contraten con el Estado”.

En la glosa del presupuesto 2020 que no se pudo cumplir por efectos de la pandemia se señalaba que modernización de la ley 19.886 debía tener criterios Pro Pyme, Pro Transparencia y Pro Competencia.

En mayo pasado en el documento de Mínimos Comunes en el capítulo sobre las PYMES se señaló que “Exigiremos que el Proyecto de Modernización de Compras Públicas que ingresó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, recoja estos planteamientos y establezca criterios pro PYMES y mayor transparencia sobre los beneficiarios finales.

Proponemos las siguientes medidas:

1. Eliminación de las garantías por seriedad de la oferta para Mipes.
2. Solicitar boletas de fiel cumplimiento con un monto máximo de 3% tanto en los convenios marcos como en el resto de sistema de compras públicas.
3. Re-diseñar Convenios Marcos, con acceso exclusivo para las Mipymes.
4. Implementar licitaciones desagregadas por líneas de productos

- 5.Limitar reglamentariamente la concentración de adjudicaciones,
- 6.Desarrollar licitaciones exclusivas para MIPYME.
- 7.Abrir postulación para Convenio Marco de producción y servicios culturales.
Promover el acceso de las Pymes de Cultura a los distintos instrumentos de compras públicas.
- 8.Activar planes específicos para las pymes en las regiones de Chile”.

SUGERENCIAS POLÍTICAS.-

Estas materias no fueron abordadas ni acogidas por el Ministerio de Hacienda durante la corta tramitación en la Cámara de Diputados –beneficiados por presidencia de diputado Lorenzini en Comisión de la Cámara que votó con oficialismo en fast track-; por tanto, **el desafío político es presionar al Ejecutivo que acoja estos temas sea escuchando a los actores PYMES y expertos –adjuntamos lista- y asumiendo el set de indicaciones que ya están listas para ser presentadas por los senadores de Oposición.**

Es bueno insistir en el debate inicial que Hacienda vía subsecretario Weber no patrocinó indicaciones de oposición y nuestra sugerencia es que aprobación en general al proyecto de ley está linkeada a que gobierno acoja las indicaciones opositoras –que ya están listas-.

**LISTADO DE INVITADOS A AUDIENCIAS EN COMISIÓN DE ECONOMÍA
PARA PROYECTO SOBRE COMPRAS PÚBLICAS**

A) ONG'S Y EXPERTOS

PAULA DÍAZ , OBSERVATORIO FISCAL QUE TIENE DIVERSOS ESTUDIOS
SOBRE FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE MERCADO PÚBLICO
[REDACTED]

VALERIA LUDDERT, ESPACIO PÚBLICO, UNIDAD TRANSPARENCIA

TRINIDAD INOSTROZA , EX DIRECTORA CHILECOMPRAS (2014-2018)
[REDACTED]

GUILLERMO JIMENEZ, PROFESORA DERECHO PÚBLICO UNIV ADOLFO
IBÁÑEZ

B) GREMIOS PYMES

EDUARDO DEL SOLAR , CONVERGENCIA MESA PYME
[REDACTED]

MARCOS RIVAS , PRESIDENTE ASECH
Invitar vía Tomás Silva (gerente ASECH)+ [REDACTED]

GIANINA FIGUEROA , UNAPYME
[REDACTED]

ENRIQUE ROMÁN, INSTITUTO PYMES
[REDACTED]

ROBERTO FANTUZZI , ASEXMA
[REDACTED]

LUIS SOLÍS , PROVEEDORES JUNAEB , PRESIDENTE CONSEJO SOCIEDAD
CIVIL CHILE COMPRA

DIEGO MIRANDA , PRESIDENTE Asociación de funcionarios de Chile Compra
[REDACTED]

Indicaciones al Proyecto de Ley que modifica el decreto ley Nº 3.063, de 1979, y crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro. Boletín 14.486-05

1) Al artículo 1º:

a. Para reemplazar el numeral 18 de la letra (B) del artículo 46 A del nuevo título VIII Bis, por uno del siguiente tenor:

“Cualquier otro propósito de interés general, según se establezca en el reglamento que regulará esta ley, emitido por el Presidente de la República en el plazo de 3 meses desde la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial”

➔ Explicación: la redacción original del numeral establece que será la secretaria técnica la que califique de interés general los propósitos no enumerados anteriormente, lo que constituye claramente una posibilidad de arbitrariedad muy alta, sumado a la falta de criterios claros que conllevan una falta al principio de la certeza jurídica. Además, el plazo es concordante con aquel en que debe dictarse el reglamento.

b. Para agregar los nuevos incisos cuarto, quinto y sexto, pasando el cuarto a ser quinto y así sucesivamente, en el numeral 1 de la letra (C) del artículo 46 B del nuevo título VIII Bis, del siguiente tenor:

“Las Donaciones de un monto inferior o igual a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales podrán deducir el 100% del monto de la donación de la base imponible”

“Aquella parte de las donaciones que supere las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, y de la cual a lo menos el 33% de dicha parte haya sido donada al Fondo Mixto de Apoyo social regulado en la ley 19.885, pudiendo el donante proponer el área de proyectos o programas a que se destinará ese porcentaje en la forma que establezca el reglamento, podrán deducir el 50 % del monto de la donación. Aquella parte de las donaciones que supere las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, y de la cual un porcentaje inferior al 33% de dicha parte haya sido donado al Fondo, podrán deducir el 35% del monto que exceda las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales”

“Para efecto de lo señalado en los números anteriores, todas las donaciones de un monto inferior o igual a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales realizadas por un donante al mismo donatario, en el mismo año calendario, serán consideradas una única donación por el monto total donado en dicho período para efecto de determinar la deducción aplicable a la base imponible”

➔ Este artículo es el clave del proyecto de ley, pues es el que cambia el rol del estado en la filantropía. Por lo que, si queremos que el estado siga jugando un rol importante, debemos establecer ciertas reglas bajo las cuales se vea fortalecido el

Fondo Mixto de Apoyo Social establecido en la ley 19.885. En este sentido, se busca aplicar los mismos criterios que dicha ley para las deducciones que correspondan.

- c. En el numeral 3 de la letra (C) del artículo 46 B del nuevo título VIII Bis para:
 - i. Eliminar el numeral 3 de la letra (C) del artículo 46 del nuevo título VIII Bis
→ impedir que existan beneficios tributarios asociados a las donaciones desde y hacia el exterior
- d. Para reemplazar la palabra “entregar” por “enviar” en el numeral 4 de la letra (C) del artículo 46 B del nuevo título VIII Bis.
→ CEFIS UAI: habilitar en el portal web que la emisión del certificado electrónico de donación remita automáticamente una copia al SII y al donante, pudiendo la entidad donataria indicar el correo electrónico del donante
- e. Para eliminar en numeral 1 letra C del 46 B en inciso 1 al final la frase “Los límites indicados aplicarán aún en caso de pérdida tributaria”
→ No debe otorgarse beneficios tributarios en caso de pérdida tributaria
- f. En numeral 1 letra C del artículo 46 B reemplazar “20.000 Unidades Tributarias Mensuales” por “10.000 unidades tributarias mensuales”
→ Rebaja del límite máximo de donaciones
- g. Agregar la frase “en el plazo de 20 días hábiles, contados desde que haya sido presentada la solicitud de inscripción” entre la palabra “Hacienda” y el punto final, en el inciso cuarto del artículo 46 F del nuevo título VIII Bis.
→ CEFIS UAI: incorporar plazos es necesario para cumplir objetivo de generar un sistema más ágil de donaciones.
- h. Agregar un nuevo inciso quinto en el artículo 46 F del nuevo título VIII Bis, del siguiente tenor:

“La secretaría técnica únicamente podrá rechazar, mediante resolución fundada, una solicitud de incorporación al registro sólo por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley. Contra las resoluciones que rechacen la incorporación al registro podrán interponerse los recursos establecidos en la ley N° 19.880”

→ Creación de mecanismos que resguarden arbitrariedades de la secretaría técnica
- i. Agregar la frase “informada a la Secretaría Técnica” entre la palabra “simple” y el punto seguido, en el inciso penúltimo del artículo 46 F del nuevo título VIII Bis.
→ CEFIS UAI: Simple aclaración de certeza

- j. **Agregar la siguiente frase “que deberán contener al menos los documentos que permitan la individualización de los donatarios y las partes relacionadas” entre la palabra “solicitantes,” y “las” en el inciso final del artículo 46 F del nuevo título VIII Bis**
→ obligar a que acompañen información de partes relacionadas genera mayor transparencia y complica la elusión a través de donaciones. Sería ideal que los donantes también tengan que inscribirse en un registro, sin embargo, al menos se ataca el problema por el lado de los donatarios.
- k. **Para reemplazar actual artículo 46 K por el siguiente artículo:**

“La fiscalización de lo dispuesto en este título corresponderá al Servicio de Impuestos Internos, que deberá dictar una normativa general en el plazo de 60 días contado desde la publicación de la ley”

→ Fiscalización debe corresponder totalmente al servicio de impuestos internos, y la secretaria técnica estar abocada solamente al fin de llevar el registro

DIPUTADO JOSÉ MIGUEL ORTIZ NOVOA

Comisión de Agricultura

MATERIA: 1.- (Bol.N° 12757-01) Proyecto de ley que modifica el decreto ley N° 3.516, sobre división de predios rústicos.

1. Introducción

En lo fundamental, el decreto ley 3.516 de 1980, regula la subdivisión de suelo rústico fuera de los planes reguladores intercomunales metropolitanos (PRI)¹. Establece además, una superficie mínima de 5.000m² para todos los destinos manteniendo el carácter rústico del suelo; establece sanciones por incumplimiento, nulidad de los actos y órganos responsables de la fiscalización. Por último, establece excepciones para subdivisiones de menor superficie, para fines públicos y sociales.

2. Cuál es el problema y el conflicto

La ausencia de regulación al respecto, ha traído consigo una innumerable cantidad de externalidades negativas, de las que nadie se hace cargo. Entre las consecuencias de esta falta de regulación y haber dejado al mercado como único instrumento de desarrollo, se encuentran las siguientes: Se está subdividiendo suelo de alto valor productivo y/ambiental y reemplazándolo por un uso habitacional. Estos nuevos usos generan impactos ambientales no cuantificados ni mitigados. De esta manera se va deteriorando la vida y la actividad rural. Este es entonces el sentido de la modificación: entregar más certeza la regulación.

Es importante consignar que las consecuencias negativas, son compartidas por todos los expositores. Tanto el profesor Luis Bresciani, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUC, como la profesora Beatriz Bustos, de la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile, y el investigador del CECPAN², Jorge Valenzuela, mencionaron la falta de planificación respecto del crecimiento urbano, en detrimento del mundo rural.

3. Consecuencias ambientales, de infraestructura e institucionales

Esta falta de regulación genera, crecimiento urbano al margen de la planificación; sub-urbanización de baja densidad y bajo estándar urbano, impacto negativo en áreas rurales y agrícolas; degradación de recursos naturales y del paisaje. Son las consecuencias más recurrentes.

Y como este proceso no va acompañado de planificación, produce, a su vez, en diversos ámbitos, serias deficiencias: Por ejemplo, en el tema de transportes, el caos (tacos, delincuencia) que se forma producto de la presión de una gran cantidad de autos que cruzan por las mismas calles de pueblos y ciudades que no se han adaptado a este crecimiento. En el ámbito de la agricultura que pierde suelos para la producción de alimentos. También el

¹ Los PRI son Santiago, Concepción y Valparaíso

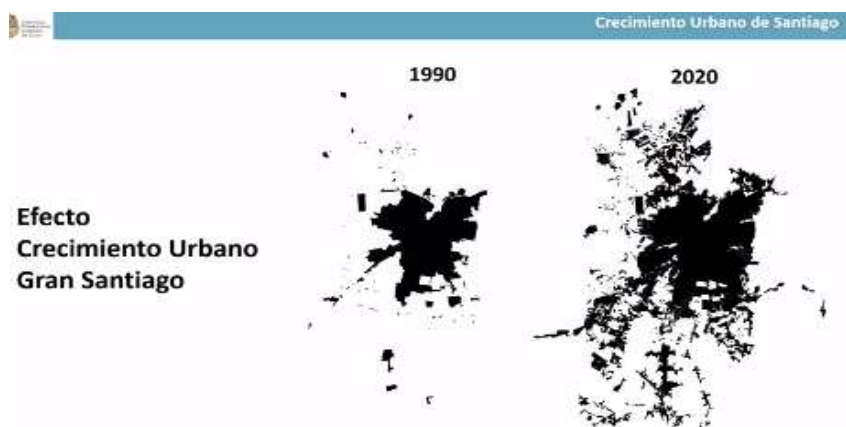
² Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural, Ancud

ámbito municipal, toda vez que no tienen los recursos, atribuciones y personal para responder a la demanda por infraestructura vial, saneamiento, agua, luz, etc.

A continuación algunos ejemplos que ilustran la discusión en este aspecto de la parcelación de predios rústicos. Ahí queda de manifiesto que la planificación territorial es “letra muerta”. Entre el año 1990 y el 2020 hubo una gran cantidad de parcelaciones que fueron aprobadas por la legislación, fueron inscritos en el Conservador de Bienes Raíces y están a la espera de ser ocupadas por viviendas u otros fines. El caso paradigmático al respecto fue el crecimiento explosivo y desregulado del gran Santiago, que paulatina y sostenidamente comenzó a ocupar tierras agrícolas, para diferentes proyectos inmobiliarios orientados a diferentes estratos económicos. Desde viviendas sociales a exclusivos condominios.

Todas las comunas aledañas a Santiago han sufrido la presión e imposición inmobiliaria. Hay casos paradigmáticos. Por el ejemplo el caso de la comuna de Buin. Hace 30 años tenía una población cercana a los 35.000 habitantes. Hoy se ha triplicado y mantiene su misma estructura vial, de hace 50 años. La presión por servicios, transporte, infraestructura, han colapsado la estructura vial. La promesa de vivir en un lugar atractivo, con aire sin contaminación, para muchos se ha convertido en pesadilla, sobre todos los fines de semana.

Lámina N°1



Fuente: Profesor Luis Bresciani, exposición en la Comisión, 02/08/21

La ausencia de regulación también es un problema no solo para los territorios urbanos. También es un gran problema para los territorios frágiles ambientalmente y ecosistemas especiales, tales como humedales, lagos y lagunas. Particularmente en aquellos territorios ocupados por pueblos indígenas. En el mismo sentido del efecto del crecimiento en el gran Santiago, en la ciudad de Pucón ocurre algo similar respecto del desarrollo del sector urbano, a través de la especulación inmobiliaria, en detrimento del sector rural del territorio. Además de la coestión vial, la contaminación de las aguas y la ausencia de servicios municipales, sobre todo en periodos estivales. En la lámina N° 2 podemos apreciar una foto aérea de Pucón del año 1990, donde el proceso de fragmentación a través de las parcelas rústicas de 5.000 m², era muy incipiente.

Lámina N°2



Fuente: Profesor Luis Bresciani, exposición en la Comisión 02/08/21,

En la tercera lámina, el mismo sector que muestra el impacto de la parcelación. Se trata de loteos aprobados e inscritos en el Conservador de Bienes Raíces en el Servicio de Impuestos Internos. Son 600 hectáreas fragmentadas en parcelas rústicas de 5.000m² iguales a 7 veces el tamaño de la ciudad. O igual al centro de Santiago:

Lámina N°3



Fuente. Luis Bresciani, op.cit

Esta fragmentación realizada, en virtud del gran interés de carácter turístico del territorio significa una gran pérdida de hectáreas de masa vegetal. Además, por supuesto de ausencia de regulación vial (calles), de servicios. Es decir, se trata de asignaciones que no tienen ningún estándar de calidad. Se ha perdido paisaje, suelo vegetal y sobre todo, se ha ganado una espiral conflictos toda vez que parte importante de esos terrenos han sido reclamados por comunidades indígenas aledañas.

Una opinión similar manifiesta la profesora de la Escuela de Geografía, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Beatriz Bustos, aunque enfatizando la perspectiva territorial del asunto. En este sentido, en los territorios rurales, conforme a las nuevas formas de medir lo rural de la OCDE, la Cepal y el Banco Mundial, y no solo a través de la variable demográfica como lo hace nuestro país, vive alrededor de un 30% de la población. No, como lo contempla en INE, que habla de un 12.5%.

Estos territorios tienen diversas connotaciones y vocaciones. No solo productivistas, y extractivistas orientados a la exportación, tal como sucede hoy. Se trata de territorios “vivos”, donde el principal desafío es intentar comprenderlos más allá de lo productivo. Esto significa que las instituciones políticas-administrativas, no gestionan el territorio y se imponen las miradas sectoriales, que dejan en punto ciego las zonas rurales. No existe coordinación entre los niveles centrales, regionales y locales. Incluso más, la última política pública, al respecto, como la recién promulgada “Nueva Política de Desarrollo Rural”, del Ministerio de Agricultura, además de no contar con recursos ni con reglamentos operativos, mantiene el sesgo urbano y productivista.

Advierte la experta, que producto de la pandemia del Covid-19, que ha evidenciado las pésimas condiciones de vida urbana (congestión, contaminación, inseguridad social, alto costo de la vida, etc.) se está gatillando el interés para migrar a regiones. Lo anterior con profusa propaganda en los diversos medios y redes sociales.

Todo esto se manifiesta, por ejemplo, en las subdivisiones prediales que se han producido, por ejemplo en la comuna de Ancud, Isla Grande de Chiloé. En efecto los datos desde el año 1995 muestran el incremento de estas subdivisiones, sin planificación territorial alguna. Así, en año 1995 hubo 35 subdivisiones; el 2000, 97; en el 2005, 40; en el año 2010, 53; en el 2015, 156³. Esto ha traído consigo: aumento de tala bosque nativo, aumento del precio del suelo, problemas de escasez hídrica. Además de segregación territorial, ya que se van conformando condominios de parcelas rústicas de 5.000m². A propósito del aumento de la demanda por polos de atracción de belleza paisajista, con valor de suelo alto.

Toda esta situación, implementada solo por la disposición de un mercado inmobiliario altamente especulativo, le demanda a los diversos municipios involucrados en este fenómeno, una serie de necesidades que son imposibles de satisfacer. Por ejemplo, el tema del retiro de residuos domiciliarios; los problemas de saneamiento de aguas negras y grises, que al no tener formas de canalizar, son vertidos a los lagos y ríos, generando una gran contaminación; los problemas de conectividad vial, el acceso a luz y agua potable. Al respecto, la demanda por camiones aljibes en temporada estivales, es de una magnitud insospechada, ya que, como se ha mencionado, se parcela sin agua, ni infraestructura

³ Exposición de la profesora Bustos en la reunión de la comisión de agricultura, 02/08/21

básica. Es decir, un sinfín de nuevas necesidades para las cuales el municipio carece de capacidad de intervenir. La habitabilidad bajo estándares de calidad es solo una promesa.

Las parcelaciones y subdivisiones prediales, no solo generan consecuencias que no puede satisfacer la institucionalidad local, sino también ambientales. Particularmente en la zona de Chiloé, donde a raíz del énfasis en el mercado, no se considera de igual manera la conservación de espacios y sitios relevantes. Por el contrario, lo que se genera es incertidumbre en las normas, ya que en esta ecuación, las ideas de conservación terminan sucumbiendo ante la influencia del mercado. El Investigador del CEPAN, Jorge Valenzuela expresa estas tensiones en su mirada, desde una perspectiva más conservacionista.

Lámina N°4



Fuente: Jorge Valenzuela, Repercusiones de la Subdivisión predial sobre el patrimonio biocultural de los territorios. CEPAN, Ancud. Comisión de Agricultura del Senado, 02/08/21

Es justamente lo que ha pasado con diversas Zonas de interés turístico (ZOIT) y con los Sistemas importantes de Patrimonio agrícola Mundial (SIPAM) que existen en Chiloé y cuyas normativas son igualmente vulneradas con las subdivisiones prediales que se instalan en las zonas aledañas a estos sistemas. Además de la destrucción de bosque nativo de zonas prístinas de baja ocupación humana, se fuerza la instalación de servicios e infraestructura (siempre que existan los recursos municipales) en zonas contiguas afectando de manera negativa el territorio.

La mayor demanda de agua potable, por ejemplo, no se condice con la escasa y las más de las veces nula intervención de estrategias hídricas, que permitan hacer inversiones en zonas agrícolas devenidas ahora, después de la subdivisión predial, en zonas inmobiliarias. Estas acciones inmobiliarias son profusamente publicitadas a través de los medios y redes sociales. Un ejemplo es lo que se aprecia en la lámina N°5, en donde se muestran fotos espectaculares, de gran resolución que muestran donde estará “tu segunda vivienda” o, como lo hemos mencionado, la vivienda definitiva si es que se toma la decisión de migrar. Pero no se muestra el gran negocio que hay detrás ni tampoco, los problemas que se generan, con esta “desregulada” subdivisión predial.

Lámina N°5



Fuente: Jorge Valenzuela, op-cit

Es sumamente relevante permitir que sea vinculante el ordenamiento territorial y a su vez, poder normar el desarrollo inmobiliario. De lo contrario la devastación ambiental continuará siendo de gran magnitud. Lo que está pasando con el río Chepu, en la comuna de Ancud, es una muestra de ello. En las láminas N°6 y N°7, se evidencia como la parcelación en este “santuario de la naturaleza”, colapsará bosques catedrales⁴, cursos de río, contaminación, etc. Donde la única forma de llegar es través del río. Es fundamental, entonces, que la Planificación Territorial, ponga medida a los proyectos inmobiliarios.

Lámina N°6



⁴ Bosque Catedral no es una definición científica, se le denomina así a los ecosistemas de bosque nativo que han alcanzado su clímax de crecimiento.

Lámina N°7



4. ¿Qué hacer, cómo impedir esta “catástrofe que significa la pérdida de suelo agrícola (Senadora Aravena)?

Hay una oportunidad para salir de la mirada predial, propia de la lógica del mercado e incorporar una visión de planificación territorial de carácter vinculante. En esto coinciden todos los expositores. Lo mismo respecto que es una buena noticia esta modificación constitucional. Por lo tanto, es fundamental articular con los Gobiernos Regionales la planificación territorial a objeto de permitir la articulación de zonas de buffer reales. Es decir zonas de protección y amortiguación para la producción agrícola, para la mantención y cuidado del patrimonio natural e incluso para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Es decir, ordenar la presión inmobiliaria.

A propósito de la elección de los Gobernadores Regionales, más allá de un tema de atribuciones, presupuesto y espera para la puesta en marcha de un proceso real y sostenido de Descentralización, se supone avalado además por los resultados que en la materia determine la Convención Constitucional, hay que avanzar de manera paralela en los alcances regionales de instrumentos como los Planes de Ordenamiento Territorial (PROT), que, dado que nos son vinculantes, son prácticamente letra muerta. Lo mismo con los Planes Regionales Interurbanos metropolitanos (PRI). En este sentido se requiere reforzar las facultades de ambos instrumentos de ordenamiento y planificación regional.

5. Las propuestas

Desde esta perspectiva, se valora que la modificación de la ley 3.516, incorpore que la subdivisión mínima ya no será de 5.000m², sino de 5 hectáreas. Por lo tanto también es

valorable que se amplíe la potestad de regulación a todos los planes Regionales interurbanos. No solo a Santiago, Concepción y Valparaíso.

Por supuesto que es valorable también que se esclarezcan de manera nítida las excepciones para divisiones menores a las 5 hectáreas. Sean para viviendas sociales o equipamiento comunitario. Parece interesante, en este aspecto, que se pueda incorporar a los municipios en los procesos de aprobación y control.

Una vez aprobada la subdivisión es recomendable ampliar los mecanismos de control que hoy no existen. Por ejemplo, en el archivo Municipal debe ser obligación de archivar el plano de subdivisión en la Dirección de Obras Municipales (DOM) y en el Conservador de Bienes Raíces. De la misma manera, el Conservador de Bienes Raíces debiera dejar constancia, mediante inscripción al margen, que el nuevo predio resultante solo podrá ser destinado a los fines que dieron origen a la subdivisión.

En la lógica de los territorios buffer, parece interesante reconocer categorías de conservación de uso del territorio, en conjunto con la existencia de otras categorías de uso. En este sentido es interesante analizar la legislación comparada: España, Nueva Gales del Sur, Argentina⁵, por nombrar dos países, usan diferentes categorías para el uso del territorio: asegurar, por ejemplo, usos productivos (agrícolas, forestales, etc.), usos para segunda vivienda y usos habitacionales. Lo importante al respecto es generar incentivos para mantener los primeros; velando por integración socio-espacial de los segundos y exigiendo provisión de infraestructura básica para el tercero.

Las categorías resultantes deben ser coherentes con los Planes Intercomunales y Regionales de Ordenamiento Territorial, que se preocuparán además, de la incorporación de elementos de conservación ecológica. Además de congelar las parcelaciones hasta que los municipios no aprueben sus planes reguladores intercomunales. O a lo menos que se ingresen al SEIA proyectos sobre un número determinado de parcelas o que impliquen impactos significativos.

También se deberían prohibir, restringir y o calificar proyectos inmobiliarios en territorios finitos, sea, islas, islotes, o estructuras de hábitats singulares o amenazados. En la misma línea, exigir la reforestación o restauración de un área similar a la construida, en los casos que existan permisos sectoriales, o se constate deforestación a través de fiscalización.

Sin embargo, por más regulaciones que queden escritas, si los proyectos de ordenamiento territorial no son vinculantes y si no dialogan (como ocurre ahora) con las políticas públicas, a objeto de definir vocaciones productivas, zonas de protección, leyes de suelo, esta modificación continuará siendo deficitaria.

⁵ La experta de la Biblioteca del Congreso, Verónica de la Paz, muestra en todos los ejemplos, planificación territorial vinculante, categorías para diferentes usos, prácticamente imposibilidad de subdivisión de la propiedad rural, sino es con la aprobación de instancias municipales y/o regionales

En una línea similar se pronuncia el Director del Instituto de estudios Urbanos y Territoriales, de la Facultad de Arquitectura de la PUC⁶, aunque con un énfasis en el porqué del negocio inmobiliario. También respecto al aumento de precios de las viviendas. Dice que la innovación financiera ha transformado la deuda hipotecaria en atractivos instrumentos de inversión, por tanto son altamente apetecidos en el mercado. Por otro lado, el estancamiento de los salarios, pensiones e inseguridad social, hace que quienes pueden invertir pongan sus ojos en comprar viviendas más que el ahorro tradicional que tiene bajos retornos. **A esto se suma las compras especulativas por inversionistas hormiga e institucionales y que una parte importante de los subsidios por parte del Estado a las familias requieren de un aporte propio que se suple con préstamos hipotecarios.**

¿Cómo abordamos este problema?

Definitivamente la respuesta está en restringir la excesiva financiarización de la vivienda y en que el Estado debe tener una participación más activa en el mercado. No sacamos nada con relajar las normas de los planes reguladores para aumentar la oferta de suelo, lo que tenemos que revisar en profundidad son las reformas a los mercados de capitales que se hicieron en las últimas décadas y parte de la estructura tributaria, que es donde tienen origen una parte importante del aumento del precio de las viviendas

⁶ Luis Fuentes en La Tercera, 12/08/21

LA CENTROIZQUIERDA DEFINIÓ SU OPCIÓN PRESIDENCIAL

Con la participación de más de 150.000 ciudadanos/as, la centroizquierda definió su opción presidencial de cara a la primera vuelta de noviembre.

En un inédito proceso de Consulta Ciudadana organizado por la propia coalición, sin ningún apoyo del SERVEL, sin franja televisiva que promoviera la participación ciudadana organizó una consulta en todo el país, en 600 locales de votación, con vocales propios; generó un proceso electoral que le da una importante base de legitimidad al sector y a la candidata electa con más del 60% de la votación como es la senadora Yasna Provoste.

En un escenario presidencial líquido, donde pueden haber cerca de 10 candidaturas presidenciales la centroizquierda socialdemócrata estará en la papeleta de noviembre con una candidata mujer, de regiones, representante de los pueblos originarios, hija de la educación pública como es lo que representa Yasna Provoste.

Será la única candidata presidencial mujer –muy lejos de la aspiración paritaria, revelando el tradicionalismo de las otras ofertas políticas- en una sociedad que cada día más abre espacios a la participación femenina, pero aquí en la política pareciera haber más discurso que realidad.

Esta consulta levantada a ñeque no puede compararse con la primaria legal del 18 de julio, pero a la centroizquierda le da un nuevo aire unitario ya que en 2017 fue dividida en las opciones Guillier y Goic y en mayo estuvo a un tris de desaparecer como coalición. Es enorme entonces la tarea que tendrá Yasna Provoste para reconstruir un ethos político común que reúna y movilice a una centroizquierda hasta ayer fragmentada y dividida.

Esta corta campaña mostró a Yasna Provoste sumando muchos apoyos de sectores independientes –incluso su equipo programático fue dirigido por una dupla paritaria independiente-, sumo a parlamentarios PPD, a dirigentes de organizaciones sociales mostrando que su opción superaba las estrechas fronteras partidarias de la DC. Por esa razón muchos coinciden que este es un triunfo de Yasna Provoste y no de la DC, porque sumó a una transversalidad que debe profundizar y ampliar de cara a noviembre.

Yasna Provoste en el corto plazo debe integrar y unir a los adherentes de Narvaez y Maldonado para potenciar su opción presidencial, tanto en las tareas programáticas como en su despliegue territorial, como lograr construir una lista parlamentaria competitiva y de carácter nacional como también para superar el nombre de Unidad Constituyente por una convocatoria más amplia y transversal para movilizar electores para noviembre.

Un fuerte desafío que tiene la centroizquierda es reconectarse con la nueva sociedad civil, recuperar lazos y diálogo con los nuevos movimientos sociales como los ligados al feminismo, a los medioambientales, los regionales, los emprendedores, los urbanistas que hoy tienen mayor influencia social que el sindicalismo y las juntas de vecinos en los territorios.

Una candidatura presidencial competitiva en 2021 requiere recrear confianzas con la sociedad civil y también con la gruesa capa de familias de ingresos medios que han sentido la vulnerabilidad de sus vidas cotidianas por la pandemia, pero sigue teniendo aspiraciones de mejores empleos y mejores condiciones materiales de vida y esa capacidad de representación social la perdió en la última década la centroizquierda, expresión de ello es que no está dirigiendo municipios como Maipú, La Florida, Puente Alto por citar algunas comunas de ingresos medios.

Dura tarea tiene Yasna Provoste para convertir a la centroizquierda en una opción presidencial competitiva que le permita pasar a segunda vuelta. Para lograr eso requiere unidad política y social, pero también que los partidos políticos que la respaldan le den espacio y autonomía para desplegar un diseño inédito de campaña electoral y con una oferta

programática que apunte a reconstruir una país con progreso pero también con mucha equidad y respeto al medio ambiente. Hoy ingresa a la carrera presidencial –según las encuestas- como tercera en las preferencias de las encuestas que las lideran quienes ganaron las primarias legales (Boric y Sichel) y esa posición revela que deberá hacer un tremendo trabajo político, social y programático de aquí a noviembre.

Tiene cualidades que debiera explotar más: será la única mujer de la papeleta presidencial lo que debiera reforzarlo con una campaña electoral con fuerte presencia femenina, tiene experiencia política para construir esa unidad política y social que propone y es de regiones –como lo mostró con esa potente señal de celebrar su triunfo en Vallenar, en su barrio y lejos de las élites- y eso fue una poderosa señal política de que Yasna Provoste viene a remecer el tablero presidencial.

EVALUACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MINAGRI

a) La inversión en Innovación

EL MINAGRI tiene un programa sobre INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SILVOAGROPECUARIA que debe reforzarse si se quiere ser potencia alimentaria.

En 2021 su presupuesto global alcanza a \$35.761 millones y su ejecución a junio lleva a 43,4%, pero hay programas de nombres pomposos que tienen poca inversión como ocurre con el “Programa de Apoyo a la Investigación para la Competitividad Agroalimentaria y Forestal” que tiene una pequeña inversión de \$375 millones.

La Ejecución de los programas de Innovación a junio son las siguientes:

	Presupuesto	Ejecutado a junio	
Instituto de Investigación Agropecuarias	\$16.919 millones	\$8.754 millones	51,7%
Fundación para la Innovación Agraria	\$10.284 millones	\$2.583 millones	25%
Instituto Forestal	\$ 4.422 millones	\$2.130 millones	48%
CIREN	\$ 3.463 millones	\$1.751 millones	50%
Apoyo a la Investigación	\$ 375 millones	\$ 28 millones	34%

b) Los recursos del Fondo de Emergencia Transitorio en MINAGRI, se asignaron a 4 Servicios, en primer lugar, al Instituto de Desarrollo Agropecuario con recursos vigentes por \$6.900 millones y un gasto ejecutado a junio de \$175 millones (2,5% de avance).

Respecto al Programa de Riego, con recursos vigentes por \$6.831 millones, el Ejecutivo hizo presente que con dichos recursos se pretende tecnificar 11.000 hectáreas en predios de 2.900 pequeños propietarios agrícolas, esperándose que se generen 3.946 empleos en un plazo fijo de 45 días en las 16 regiones del país.

La ejecución al primer semestre alcanzó un 2,5%.

En el Servicio Agrícola y Ganadero, el presupuesto vigente totalizó \$239 millones, dispuestos en proyectos de inversión, los que al mes de junio no presentaron gastos.

En la Corporación Nacional Forestal: - El Programa Manejo del Fuego, con recursos por \$2.859 millones presentó una ejecución al mes de junio de \$174 mil.

El presupuesto se concentra en el subtítulo 22 bienes y servicios de consumo para la reparación y mantención de Brigadas Forestales (102 bases de brigadas de larga data de construcción).

- El Programa Áreas Silvestres Protegidas, con el proyecto Guardería Torres del Paine, presentó recursos vigentes por \$3.605 millones y una ejecución al primer semestre de \$11 millones (0,3% de avance).

- En el Programa Gestión Forestal, con recursos vigentes por \$17.621 millones y un gasto de \$1.193 millones (6,8% de avance).

Los recursos se destinan a la forestación y recuperación de bosques y busca forestar y/o recuperar 25.000 hectáreas de bosques (20.000 ha en 2021 y 5.000 ha en 2022) en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

La Comisión Nacional de Riego, presenta un presupuesto vigente al mes de junio de \$47.056 millones y un gasto ejecutado de \$3.428 millones (7,3% de avance).

Los recursos se destinan principalmente al financiamiento del Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego, con un presupuesto de \$214 millones y sin ejecución presupuestaria a junio de 2021; y para la transferencia de capital destinadas a la "Bonificación por Inversiones de Riego y Drenaje Ley N° 18.450 ", con \$46.587 millones y un gasto ejecutado a junio de \$3.335 millones (7,2%).